

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 08 de octubre de 2020

Auto Interlocutorio No. 91

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-016-2019-00257-01.
DEMANDANTE:	MARIA XIMENA CAICEDO NAVIA Y OTROS
DEMANDADO:	RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OTROS
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ LA CADUCIDAD DEL PRESENTE MEDIO DE CONTROL.

Aprobada en Sala y Acta de la fecha.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 850 del 02 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA, la señora María Ximena Caicedo Navia y otros demandaron a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros para que respondan por los perjuicios de índole material y moral ocasionados por la deficiente, irregular e inadecuada actuación investigativa que conllevó a la privación de la libertad del señor Wilmer Manuel Caicedo Navia en hechos ocurridos el 21 de junio de 2017.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 850 del 02 de diciembre de 2019¹, el Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali rechazó la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa, bajo los siguientes argumentos:

Dijo que lo que pretende la parte actora, es el reconocimiento de los perjuicios causados por la captura del señor Wilmer Manuel Caicedo Navia el 21 de junio de 2017 y que revisada la demanda, el 22 de junio de 2017 el afectado recobró la libertad, por tal razón, argumentó que el término de caducidad inició su cómputo el 23 de junio de 2017 y culminó el 23 de junio de 2019.

Consideró que, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, 31 de mayo de 2019 y la fecha de la constancia de no

¹ Folio 194-195 del expediente.



conciliación proferida por la Procuraduría, 12 de julio de 2019, el demandante contaba con 24 días para radicar la demanda, 05 de agosto de 2019, sin embargo, fue presentada el 04 de octubre de 2019, razón por la cual, concluyó que el medio de control presentado se encuentra caducado.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante, presentó recurso de apelación² argumentando lo siguiente:

Que el A-quo erró al considerar que el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa operó a partir de la fecha en que se ordenó la libertad del demandante, 22 de junio de 2017, pues el proceso penal continuó y más adelante el ente acusador pudo haber imputado cargos por el delito de violencia intrafamiliar, circunstancia que hubiera generado la posterior captura, sin embargo, el proceso fue archivado el 04 de marzo de 2019 a través del acta de conciliación.

Argumentó que la decisión tomada en la audiencia preliminar no es el derrotero para iniciar el cómputo de caducidad del medio de control, pues es la etapa del proceso que da apertura a la investigación y puede ser revocada con posterioridad.

Aclaró que lo pretendido en el presente asunto no es que se declare administrativamente responsable a los demandados por una privación de la libertad, por el contrario, busca se declare la falla del servicio por error judicial tal y como se expuso en el poder, hechos y pretensiones de la demanda.

Concluyó que los términos para incoar la demanda de reparación directa iniciaron desde el día siguiente en que la Fiscalía resolvió el archivo del proceso, esto es a partir del 05 de marzo de 2019 y en consecuencia, tenía hasta el 5 de marzo de 2021 para demandar.

V. CONSIDERACIONES:

5.1 Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

Además, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma

² Folio 196-204 del expediente.



instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

“ ... ”

5.2 Problema Jurídico

En atención al recurso de apelación interpuesto, corresponde al Despacho determinar si se debe confirmar o revocar la decisión del Juez de primera instancia que rechazó la demanda de reparación directa, por operar el fenómeno de caducidad del medio de control de reparación directa.

5.3 El ejercicio oportuno de la acción

El Consejo de Estado (2014)³, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. De ahí, que las partes les correspondan asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Cabe resaltar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

5.3.1 Caducidad – recuento normativo y jurisprudencial:

Para comenzar, debe decirse que en el presente asunto el medio de control ejercido es el de reparación directa, contenido en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 y, en cuanto a la oportunidad para presentar la demanda, el literal (i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, señaló:

Artículo 164. La demanda deberá ser presentada:

[...]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[...]

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de **dos (2) años**, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia **de la acción u omisión causante del daño**, o de cuando **el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo** si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Importante es transcribir el siguiente pronunciamiento, en el cual el Consejo de Estado (2014)⁴ sobre el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del C.P.A.C.A. manifestó:

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2009, expediente nro. 36.834 (auto). Reiterado en la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 26 de febrero de 2014, radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588).

⁴Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2014, Consejero Ponente Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.



El propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al convertirlas en situaciones jurídicas consolidadas. (...) la demanda de reparación directa caducará, por regla general, al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (...) en algunos casos resulta necesario identificar el momento preciso en el cual se configura o consolida el daño para poder computar el término de caducidad del medio de control, situación que reviste de complejidad si se tiene en cuenta que en relación con el tiempo no todos los daños pueden ser verificados en un momento exacto, pues es posible que sus efectos se prolonguen en el tiempo o incluso se consoliden en una etapa posterior a la fecha de ocurrencia del hecho dañoso.

Por otro lado, el Consejo de Estado (2019)⁵ ha manifestado que cuando la demanda incoada bajo el medio de control de reparación directa cuyas pretensiones estén encaminadas a establecer la responsabilidad por error judicial, el término de dos años se contabiliza a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia contentiva del error:

Quando el hecho dañoso es una providencia respecto de la cual se predica la existencia de un error, la Sala, de manera reiterada, ha considerado que el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de aquella y que se agote la instancia respectiva.

Se concluye que, cuando el daño alegado se deriva de un error jurisdiccional, el término de caducidad inicia su cómputo a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial causante del perjuicio.

Ahora bien, cuando la pretensión va encaminada a que se declare la responsabilidad del estado por el título de imputación de falla del servicio por privación injusta de la libertad, el Consejo de Estado ha indicado lo siguiente:

“...El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el literal i), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Sin perjuicio de la regla contenida en la mencionada disposición normativa, en los asuntos de reparación directa bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, consideración que resulta compatible con la norma puesta de presente, dado que es a partir de ese evento que se tiene conocimiento efectivo del daño, como consecuencia de la decisión absolutoria⁶.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado nro. 25000-23-26-000-2011-00631-01(50955).

⁶ Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, exp. 13622. CP. María Elena Giraldo



En el sub lite, la Subsección advierte que la providencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, por medio de la cual declaró la prescripción de las acciones penal y civil, como consecuencia decretó la “CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO seguido en contra de los mencionados procesados” fue expedida el **23 de enero de 2013** y quedó ejecutoriada el 25 de febrero de la misma anualidad⁷.

Así las cosas, el término de caducidad, en principio, correspondían entre el 26 de febrero de 2013 y el 26 de febrero de 2015; sin embargo, se suspendió con la solicitud de conciliación extrajudicial radicada por la parte actora el 23 de enero de 2015, trámite que se declaró fallido el 26 de febrero siguiente.

Como la demanda se presentó el mismo día en el que se dio por agotado el trámite conciliatorio, se concluye que el derecho de acción se ejerció en oportunidad^{8... ”9}

CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320¹⁰ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306¹¹ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose **solamente** sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

La Sala iniciará su análisis, determinando el título de imputación relacionado en el escrito demandatorio, y así efectuar el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa. Para dicho fin se tendrá en cuenta lo siguiente: a) el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa a través del título de imputación de privación injusta de la libertad se contabiliza a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad y b) el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa a través del título de imputación de error jurisdiccional se efectúa a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia respecto de la cual se predica un error y que se agote la instancia respectiva.

Para iniciar, se evidencia que el actor busca se declare administrativa y solidariamente responsable a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Cali y a la Fiscalía General de la Nación – Dirección de Fiscalías por el daño antijurídico “*derivado de la falla del servicio en la que incurrieron las entidades demandadas como consecuencia de la deficiente,*

Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, exp. 37410. CP. Mauricio Fajardo Gómez.

⁷ Folio 522, cuaderno 1 A.

⁸ Folios 576 a 578, cuaderno 1A.

⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera- Subsección A. Consejera Ponente: MARTHA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 76001-23-33-000-2015-00207-01(63084). Actor: CLAUDIA MARÍA CORREA QUINTERO Y OTROS. Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL.

¹⁰ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. (...).

¹¹ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



irregular e inadecuada actuación investigativa adelantada tanto por las fiscalías 58 y 74 locales CAVIF, y sus respectivos investigadores, como del Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, que conllevó a que el pasado 21 de junio de 2017, mi poderdante fuera privado de la libertad instantes en que funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación de Cali, le hicieran efectiva la orden de captura emitida por ese Juzgado”¹².

Continuando con la lectura de la demanda, se observa que, para fundamentar la solicitud de los perjuicios morales causados a los demandantes, argumentó que se generaron: 1) como consecuencia de la ejecución de la captura del señor Wilmer Manuel Caicedo Navia, la cual se fundamentó en una orden judicial emitida con deficientes medios probatorios y 2) como consecuencia de la vinculación penal que duró más de 20 meses¹³.

Para sustentar dicha conclusión, transcribió apartes jurisprudenciales alusivos a la privación injusta de la libertad¹⁴ y el Capítulo VII “FUNDAMENTO DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES”, se encaminó a demostrar la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado frente a dicho título de imputación.

Por tanto, de la lectura de la demanda la Sala encuentra que los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la parte demandante, se encausaron bajo los parámetros del título de imputación de privación injusta de la libertad, pues de los planteamientos esbozados, no se desprende queja alguna frente a una providencia que contenga un presunto error, pues si bien, manifestó que la investigación desplegada por la Fiscalía conllevó a la privación injusta de la libertad y respectivo trámite penal, no atacó una providencia en concreto que permita concluir que el régimen de imputación invocado sea el de error jurisdiccional como pretende establecer en el recurso de apelación, caso en el cual, el término de caducidad del medio de control de reparación directa iniciaría a partir de la ejecutoria de dicha providencia.

Además, como se desprende de la Constancia de Conciliación prejudicial llevada a cabo en la Procuraduría 217 Judicial I Para Asuntos administrativos, la pretensión de la solicitud fue la siguiente: “*Que se les reconozca y pague los daños y perjuicios causados con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido WILMER MANUEL CAICEDO NAVIA, el 21 de junio de 2017...*”¹⁵

Siendo así, la Sala efectuará el análisis teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la demanda, de los cuales se desprende que el régimen de imputación es el de falla del servicio por privación injusta de la libertad, pues si bien, en el recurso de apelación se indicó que es error jurisdiccional, también lo es, que el apoderado judicial de la parte demandante no indicó de manera clara la providencia objeto de error.

¹² Primera pretensión de la demanda, folio 9 y anverso.

¹³ Folio 12 del expediente.

¹⁴ Folio 13 del expediente.

¹⁵ Folio 192 del expediente.



Por tanto, teniendo en cuenta que el término de caducidad del medio de control de reparación directa bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad inicia su cómputo a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado y en el presente asunto, no se profirieron dichas providencias, ya que el proceso se archivó como consecuencia del acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes ante la Fiscalía 74 Local de la ciudad de Cali¹⁶ en virtud de lo dispuesto en el artículo 522¹⁷ de la Ley 906 de 2004, se debe realizar dicho cómputo teniendo en cuenta la fecha en que el señor Wilmer Manuel Caicedo Navia quedó en libertad, es decir el 22 de junio de 2017, como se desprende del acta de la audiencia llevada a cabo por el Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con función de control de Garantías¹⁸, por lo tanto, tal y como lo establece el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, se logra establecer que la fecha límite para instaurar la demanda era el día **23 de junio de 2019**.

Sin embargo, el **31 de mayo de 2019** fue radicada la solicitud de conciliación ante la Procuraduría 217 Judicial I para asuntos administrativos de Cali que suspendió el término de caducidad hasta el día **12 de julio de 2019**, fecha en la cual se expidió la constancia de la realización de la conciliación prejudicial¹⁹, por tanto, a partir del **13 de julio de 2019** el demandante contaba con 24 días adicionales para presentar la demanda de reparación directa, los cuales culminaron el **5 de agosto de 2019** y la demanda fue presentada el **4 de octubre de 2019**²⁰, como se desprende de la constancia de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos, coligiéndose así que ha operado la caducidad de del medio de control.

Por tanto se confirmará el auto nro. 850 del 2 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali, que rechazó la demanda de reparación directa por caducidad.

En consecuencia, se;

¹⁶ Folio 151 a 152 del expediente.

¹⁷ **ARTÍCULO 522. LA CONCILIACIÓN EN LOS DELITOS QUERELLABLES.** La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal.

En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación.

Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta que así lo constata al fiscal quien procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa o, en caso contrario, iniciará la acción penal correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación.

La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente.

En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.

La conciliación se ceñirá, en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640 de 2001.

¹⁸ Folio 76 del expediente.

¹⁹ Folio 192 del expediente

²⁰ Folio 30 del expediente

Radicación : 2019-00257-01
Medio de control : Reparación Directa
Demandante : María Ximena Caicedo Navia
Demandado : Nación- Rama Judicial y otros

8



RESUELVE:

PRIMERO.-CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 850 del 2 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados

OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

PATRICIA FEUILLET PALOMARES

LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Vo.Bo Secretario

LAEI